

Iquique, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO Y OÍDO:

En estos autos ROL IC 53-2023, RUC 2140355770-3, RIT T – 168-2021, los abogados, sr. Christian Briceño Casanga, y sra. Romina Salamanca Castañeda, recurren de nulidad en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de abril pasado, por el Juez sr. Francisco Vargas Vera, que acoge la demanda subsidiaria por despido injustificado y nulidad del mismo, interpuesta por María Alejandra Bustamante Tapia en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, condenando al pago del recargo por la improcedencia de la causal invocada contenido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, el 30% sobre la indemnización por años de servicio, esto es, \$8.633.889; al pago de lo restado a título de descuento por aporte del seguro de cesantía, \$9.260.934.-; al pago de todas la remuneraciones devengadas y que se devenguen desde la fecha del despido hasta su convalidación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 162 de Código del Trabajo, con reajustes, intereses y recargos legales dispuestos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

La referida sentencia, además, rechaza la demanda principal por vulneración de derechos fundamentales y las demás prestaciones no acogidas; desestimando la excepción de compensación opuesta por la demandada.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: El abogado de la parte denunciante y demandante recurre en contra de la referida sentencia por las causales conjuntas de los artículos 477, y 478 letra b) del Código del Trabajo.

Para desarrollar la primera causal sostiene, en una extensísima argumentación, que la terminación del contrato de trabajo se produjo por necesidades de la empresa originada en la violación de diversas garantías constitucionales con ocasión del despido, pero que en este recurso se circunscribe a la indemnidad laboral; luego, copiando la



carta de despido, comenta la existencia de una causa tramitada en el mismo Juzgado, respecto de otra funcionaria de Corfo, y en que su representada fue citada como testigo, más no prestó declaración, concluyendo con la afirmación de que la desvinculación de la actora es una represalia que por ese hecho Corfo ejerció en su contra.

Más adelante, el abogado sr. Briceño copia el considerando cuarto de la sentencia, y el artículo 485 del Código, alegando que la norma no exige la ocurrencia de un plazo entre la época de la vulneración y el despido, menos cuando, como en el caso de autos, la trabajadora sí fue considerada testigo, no siendo obstáculo el que no haya declarado, ya que la vulneración surge justamente por haber sido ofrecida como testigo; agregando que en el considerando quinto, página 39 de la sentencia, se estableció una ponderación de la confesión prestada en juicio por el Director Regional de Corfo Tarapacá y de la declaración testimonial del Subdirector, pruebas que permiten constatar que todas las razones entregadas en la carta de despido para desvincular a la trabajadora no fueron ciertas, porque la verdadera razón para su despido fue por haber sido la peor evaluada, justificación que no se encuentra en la carta de despido, apareciendo que ésta contiene un relato que no corresponde a la realidad.

A continuación comienza a señalar por qué estima se violentaron las reglas de la sana crítica, en particular, el principio de no contradicción, que enseña que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, repitiendo en este caso la argumentación referida precedentemente, añadiendo que estos indicios, la confesión de Director Regional y declaración del Subdirector, personas que refutaron las motivaciones de la carta de despido al afirmar, por un lado, que la denunciante fue la peor evaluada y, por ello despedida y, por otro lado, que su jefe directo no habría participado en ningún proceso de aquella evaluación, son determinantes.



Por último, menciona que el sentenciador incurre en infracción de ley por falsa aplicación al dejar de aplicar el precepto para el caso que el trabajador sea ofrecido como testigo en un juicio contra su empleador, conforme consigna el artículo 485 inciso 3 del Código del Trabajo, pues el acta de audiencia preparatoria donde la denunciante figura como testigo debió bastar para exigir a la denunciada que explicara que el despido no obedeció a una represalia por aquel antecedente, en vez de imponer requisitos formales que la norma no exige, como es que el despido se hubiera producido dentro de un plazo desde que figurara en la lista de testigos y que, además, haya prestado declaración en aquel juicio, volviendo a repetir las mismas ideas.

SEGUNDO: La segunda causal es la del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, en relación a su artículo 456, y para fundarla el abogado repite nuevamente sus alegaciones sobre el considerando quinto del fallo, relacionada con lo que considera la ponderación de la confesión prestada por el Director Regional de Corfo Tarapacá, y la declaración del Subdirector, pruebas que permiten constatar que todas las razones entregadas en la carta del despido para desvincular a la trabajadora no fueron ciertas, renovando las mismas argumentaciones de la causal anterior.

TERCERO: Finalmente, la parte pide se acoja el recurso, se invalide parcialmente la sentencia y se dicte otra de reemplazo que declare la vulneración de garantías constitucionales, por haberse conculcado la indemnidad laboral de la denunciante con ocasión del despido, y se ordene el pago de las respectivas indemnizaciones, con costas.

CUARTO: La abogada sra. Salamanca, en representación de Corfo, recurre de nulidad por la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 4, 1567 N° 5, 1655, 1656 del



Código Civil; 13 y 52 de la Ley 19.728 sobre Seguro de Desempleo, en relación con el artículo 168 del Código del ramo.

Para explayarse sobre su medio de impugnación alude a la demanda, contestación, hechos a probar, y a lo resolutivo del fallo, señalando que concurre el vicio que denuncia porque, respecto a la nulidad del despido, se vulneraron las normas del Código Civil mencionadas ya que el documento acompañado a folio 30, certificado de la Asociación Chilena de Seguridad, de 16 de junio de 2010, debió ser ponderado a la luz de esas disposiciones, ya que detalla el pago de las cotizaciones del mes de junio de 2010, pagadas en las respectivas entidades previsionales, y de salud, mientras la actora se encontraba con licencia médica, conforme lo acredita el documento incorporado a folio 29, certificado de término de reposo laboral por accidente de trayecto, que da cuenta del período de reposo desde el 9 de abril de 2010, al 4 de junio del mismo año, significando que la actora recibió el pago de sus cotizaciones previsionales durante su periodo de reposo, del 9 de abril al 4 de junio de 2010, por la Asociación Chilena de Seguridad.

Expresa la abogado recurrente que al comunicarse con desfase la licencia médica a su representada, según consta en el certificado de cotizaciones previsionales acompañado por la contraria, que consta a folio 60, enteró las cotizaciones correspondientes a abril y mayo de 2010, apreciándose que, a raíz de ello, a la demandante se le pagó de manera íntegra las remuneraciones de abril y mayo de 2010, en circunstancias que se encontraba con licencia médica en dicho período, realizándose también los correspondientes descuentos por cotizaciones previsionales por esta parte empleadora, de manera que éstos fueron pagados de manera duplicada en esos meses de 2010, tanto por la Asociación Chilena de Seguridad, como por el Comité Innova de Corfo, existiendo duplicidad de pago, operando íntegramente el pago de las cotizaciones previsionales de la actora, y



que el mes de junio de 2010, fue enterado con antelación, y por ello es que hizo la compensación, por resultarle obligatoria atendida su calidad de servicio público, correspondiéndole sujetarse a auditorías y rendiciones a la Contraloría General de la República, además del deber de resguardo de los fondos públicos que le asiste.

Alega que una simple operación aritmética permite concluir que en los meses de abril y mayo de 2010, cuando la actora se encontraba con reposo laboral debido al accidente de trayecto sufrido, del que da cuenta el certificado ACHS acompañado, a folio 29, existió una duplicidad en el pago de las cotizaciones previsionales, tanto por dicha entidad, como por la empleadora, quien pagó de forma completa su remuneración, no existiendo daño previsional, ya que si el tribunal hubiese realizado el simple ejercicio de sumar todas las cotizaciones previsionales declaradas y pagadas en una columna, y compararlas con los montos que debían ser pagadas en otra columna, no habría encontrado diferencia alguna, argumentando que por esa razón se infringieron las reglas del Código Civil, al ignorar la existencia de obligaciones recíprocas de las partes susceptibles de compensación y, por lo tanto, se infringió particularmente lo dispuesto en los artículos 1565 y 1566 del Código Civil, refiriéndose en esta sección a la compensación.

QUINTO: En cuanto al segundo motivo de nulidad contenido en la misma causal, relativa a la devolución del descuento por aporte del empleador a seguro cesantía, sostiene que se han infringido los artículos 13 y 52 de la Ley 19.728 sobre Seguro de Desempleo, en relación con el artículo 168 del Código del Trabajo, y, copiando las normas invocadas, expresa que esa sanción no está prevista por el legislador, porque si el contrato termina por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más su rentabilidad,



deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15, en consecuencia, el descuento se ha establecido legalmente por aporte de AFC, no siendo en caso alguno indebido el descuento efectuado por su representada.

Sostiene que en este marco tiene total coherencia lo dispuesto en el artículo 168 del Código del Trabajo, ya que, habiéndose establecido de manera taxativa cuál es la sanción frente a un despido injustificado, el legislador ya ha previsto la sanción, por lo cual pretender aplicar una sanción adicional, obligándola a restituir el monto por AFC, importa una grave transgresión al artículo 13 de la Ley 19.728.

SEXTO: La parte denunciada y demanda pide al concluir que se acoja su recurso, se invalide parcialmente la sentencia y se dicte otra de reemplazo que rechace la acción por nulidad del despido interpuesta por la actora, y se deje sin efecto la condena a restituir la suma de \$9.260.934, por concepto de AFC realizada en el finiquito de la actora.

SÉPTIMO: En la vista del recurso, las partes reiteraron las argumentaciones contenidas en sus libelos.

OCTAVO: Como se advierte de la síntesis precedente, los recursos de nulidad son extensos, especialmente el del abogado de la parte denunciante y demandante, pero ambos se pueden reducir a dos oraciones.

En efecto, si bien el abogado sr. Briceño plantea dos causales de nulidad, 477 y 478 letra b) del Código del Trabajo, copiando esas disposiciones, lo cierto es que de la totalidad del recurso se evidencia únicamente un reclamo por la ponderación de la prueba.

Y, tratándose de la parte denunciada y demandada, aunque la causal de nulidad es única, artículo 477 del Código del ramo, sólo una de sus aristas apunta a la aplicación del derecho, la sección



relacionada con el aporte al seguro de cesantía, en tanto el reclamo inicial es claramente una denuncia de afectación al principio valorativo de probanzas, pero apuntando a la compensación, en directa relación con la nulidad del despido.

NOVENO: Atendido lo expresado precedentemente, se avanza el rechazo de ambos recursos, y para ello de inmediato conviene recordar que la esencia de la nulidad radica en que, en tanto sanción, sólo procede en presencia de perjuicios ocasionados al litigante que no los ha provocado, siempre que no haya otra posibilidad de remediarlos, regla esencial y universal en el derecho, también presente en el artículo 478, inciso tercero del Código del ramo, e, igualmente, que la infracción de ley, en términos generales, importa la ocurrencia de una contravención formal de una norma legal, es decir, una interpretación incorrecta, o una aplicación a un caso no regulado en ella o viceversa, representando un error estrictamente jurídico revestido de particularidades trascendentales, inexcusables y relevantes.

DÉCIMO: Por ello, tratándose del recurso del abogado sr., Briceño, las causales no pueden prosperar porque, a pesar de las citas normativas, se cuestiona la valoración de los antecedentes del juicio, controversia que supone la pretensión de una nueva revisión de hechos y probanzas, lo que resulta improcedente, ya que ambas causales tienen una aplicación limitada, tanto por la naturaleza de las resoluciones impugnables, cuanto por los motivos que le sirven de fundamento, caracterizándose por su naturaleza extraordinaria, de derecho, y por impedir nuevos debates acerca del valor intrínseco o extrínseco de las probanzas.

Debe añadirse que, dado que las causales se interpusieron en forma conjunta, ellas se contraponen, puesto que mediante la causal de infracción de ley sólo es posible discutir el derecho, no los hechos,



éstos ciertamente han de ser aceptados para poder discutir las normas que se habrían vulnerado.

De esta manera, pese a su extensión, en el presente recurso lo único que se destaca es una disconformidad con la decisión del sentenciador, discrepancia que se sustenta simplemente en que no se pudo considerar irrelevante la citación a testificar de su representada en un juicio llevado a cabo con mucha antelación, ya que ésa es la circunstancia que, en su opinión, provocó la afectación de la garantía que su defendida dice quebrantada.

UNDÉCIMO: Resta en este apartado señalar que es imposible acceder a lo pretendido porque no se advierte yerro alguno en el razonamiento del sr. Juez, ya que la simple circunstancia de haber sido incorporada la denunciante en una lista de testigos en una causa de otra trabajadora de la parte demandada en época lejana, jamás podría tener alguna entidad en el motivo de despido ocurrido un año después, y, por otro lado, porque las disensiones de que extensamente da cuenta en la causa y en el recurso, ciertamente no son más que eso, diferencias, o desacuerdos que carecen de la trascendencia que pretende atribuirles, tal como acertadamente se indica en el fallo.

DUODÉCIMO: Por otro lado, correspondiendo al Juez evaluar y ponderar los indicios aportados por la trabajadora respecto de la violación a la garantía de indemnidad laboral, el sr. Juez no sólo valoró los antecedentes, sino que los sopesó, lo que se evidencia a partir de la página 31 de su fallo, leyéndose al inicio de esa sección lo siguiente: *“Que, analizados los inacabables hechos propuestos como base de vulneración de derechos fundamentales que denuncia, y teniendo por ciertos los mismos, para el solo efecto del análisis de mérito de los sucesos referidos, este juez no logra observar que el extenso relato de situaciones que contiene la demanda, mismas que en esencia fueron reconocidas en la contestación a la demanda, constituyan o puedan*



constituir las vulneraciones alegadas, siendo posible observar de los mismos el desarrollo de una relación de trabajo en que tanto la demandante como el jefe regional de la Corporación demandada ejercen sus funciones y labores propias, produciéndose las naturales diferencias que pueden surgir en una relación de trabajo y las obvias dificultades, desavenencias y otros que ocurren o pueden ocurrir en el transcurso de la misma, pudiendo llegar a constituir algunos de los hechos relatados faltas administrativas u otras falencias del jefe regional de la corporación demandada, pero no se observa que las mismas constituyen vulneración a garantías fundamentales de la trabajadora compareciente a este juicio.”.

Tales expresiones y las que le siguen dejan ver un análisis completo, sin que pueda dejar de destacarse que en el recurso el abogado recurrente redujo las circunstancias fácticas únicamente a la incorporación de la actora en una lista de testigos de una causa de una compañera de labores, lo que habría motivado una suerte de persecución en su contra tiempo después.

DÉCIMO TERCERO: Ahora bien, en lo tocante a la causal de nulidad de la parte denunciada y demandada debe obrarse de la manera señalada porque, en lo que dice relación con la compensación, tal alegación se asienta en la ponderación defectuosa de instrumentos relacionados con el pago de cotizaciones de la trabajadora en el año 2010, cuestionamiento que se ataca mediante el ejercicio de otra causal, razón por la que esa parte del recurso no puede prosperar, resultando absolutamente innecesario referirse a las normas del Código Civil citadas.

Y, en cuanto al descuento del seguro de cesantía, la Excma. Corte Suprema ha venido sosteniendo que el objetivo del legislador al establecer el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728, fue el de favorecer al empleador enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa, con una especie de beneficio cuando



debe responder de las indemnizaciones previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, por lo que siendo una prerrogativa patronal, es excepcional y por lo mismo de aplicación restrictiva, procediendo únicamente en el caso de configurarse todos los presupuestos de la norma citada, es decir, cuando el despido del trabajador es el resultado de una cierta y verdadera consecuencia de las necesidades de la empresa, sanción que también resulta aplicable a la parte denunciada y demandada.

DÉCIMO CUARTO: Sin embargo, el error en la elección de la causal de nulidad respecto del apartado de las cotizaciones no conduce al rechazo de la totalidad del presente recurso, porque, haciendo uso esta Corte de la facultad que al efecto otorga el inciso 3 del artículo 479 del Código del Trabajo, se lo acogerá en parte, por estimarse que el sr. Juez incurrió en el vicio de la letra b) del artículo 478 del Código del Trabajo respecto de la nulidad del despido.

DÉCIMO QUINTO: En ese sentido debe anotarse que analizado el insumo probatorio relativo a este aspecto, es posible entender acreditado que la trabajadora recibió el pago oportuno de sus cotizaciones, y que, por ende, no existió laguna previsional, ni de salud en mayo y junio de 2010, como lo sostuvo su apoderado en estrado, aunque, a las preguntas de la Corte, reconoció que existieron pagos de esas cotizaciones por el empleador y la Asociación Chilena de Seguridad.

DÉCIMO SEXTO: Para una mejor comprensión del asunto, corresponde asentar que el sr. Juez incumplió le obligación establecida en el artículo 456 del Código del ramo en cuanto a este rubro, pues no describió, calculó y comparó, el contenido íntegro de los documentos que fueron aportados en el juicio, porque de ellos se desprende que la actora gozó de licencia médica entre el 9 de abril y 4 de junio de 2020, ambas datas inclusive, según da cuenta el



certificado de término de reposo laboral emanado de la Asociación Chilena de Seguridad.

También se constata, del certificado extendido por Víctor Céspedes Piña, ejecutivo agencia Santiago Gerencia Metropolitana Asociación Chilena de Seguridad, que durante ese lapso la actora estuvo en tratamiento médico, conforme lo dicta la Ley 16.744, pagándose en los períodos de 9 de abril a 10 de mayo, 11 a 24 de mayo, y 25 de mayo a 4 de junio, el subsidio respectivo, integrándose además, por concepto de cotizaciones previsionales, \$165.786.-, \$72.531.-, \$; y, \$56.989.-; por cotizaciones de salud \$103.643.-, 45.518.-, y 35.764.-; y, por aporte f. desempleo \$8.695.-, \$3.804.-, y \$2.989.-.

En cuanto al respectivo certificado de Previred, en él aparece que, tanto el empleador de la demandante, como la Asociación Chilena de Seguridad, pagaron cotizaciones a la AFP Capital, y Banmédica, por los meses de mayo y junio de 2010, por los siguientes montos: \$25.544.-, \$156.267.-, \$ 50.847.-, \$97.687.-, \$18.850.-, \$25.652.-, y \$45.603.-; sin perjuicio que en los meses de julio y agosto también hubo pagos en el mismo sentido.

Y, en último lugar, del mismo certificado no se vislumbra a simple vista que exista laguna previsional en junio de 2010.

DÉCIMO SÉPTIMO: Así entonces, el examen de los instrumentos mencionados permite concluir con meridiana claridad que la trabajadora no tuvo lagunas previsionales ni de salud en 2010, que recibió pagos de cotizaciones de parte de la Asociación Chilena de Seguridad y de su empleador, sin que pueda estimarse que hubo algún monto menor al que hubiere podido corresponder en esa época, no sólo porque los hechos ocurrieron hace trece años atrás, sino además porque no existió pericia alguna que permitiera determinar - mediante cálculos aritméticos, considerando las remuneraciones de la época conforme sus liquidaciones de sueldo, y los antecedentes que



hubiere debido aportar la Asociación Chilena de Seguridad para tal propósito -, el monto efectivo que en aquella época hubiera debido pagarse; a lo que debe añadirse que sirve al efecto la explicación dada por el testigo Guillermo López Pávez, quien da cuenta del desajuste producido por la forma en que se efectuaron los pagos.

DÉCIMO OCTAVO: Por todo lo señalado, no existiendo los presupuestos necesarios para acoger la acción de nulidad del despido, y recapitulando, se rechazarán los recursos de nulidad, pero, de oficio, se anulará la sentencia librada, dictándose acto seguido sentencia de reemplazo sólo respecto de la acción de nulidad de despido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 477 a 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por los abogados don Christian Briceño Casanga, y doña Romina Salamanca Castañeda, en contra de la sentencia de veinticuatro de abril último, **y, actuando de oficio, SE INVALIDA** la referida sentencia, en cuanto a la acción de nulidad del despido, reemplazándose por la que se dicta a continuación.

Regístrese, notifíquese e incorpórese al sistema virtual.

Redacción de la Ministro sra. Mónica Olivares Ojeda.

Rol N° 53-2023 Laboral Cobranza.

 Mónica Adriana Olivares Ojeda Ministro Corte de Apelaciones Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés 10:19 UTC-4		 Pedro Nemesio Guiza Gutiérrez Ministro Corte de Apelaciones Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés 10:26 UTC-4	
 Andrés Alejandro Provoste Valenzuela Ministro Corte de Apelaciones Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés 11:32 UTC-4			



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sra. Mónica Olivares Ojeda, sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sr. Andrés Provoste Valenzuela. Iquique, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

En Iquique, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: VGZKXHDSYPB

SENTENCIA DE REEMPLAZO:

Iquique, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

VISTO Y OÍDO:

De la sentencia anulada, se reproducen su parte expositiva, considerandos y citas legales, previa eliminación de su motivo séptimo.

Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Del recurso, alegatos de las partes, motivaciones de la sentencia anulada que se han mantenido, y del fallo de nulidad precedente, se desprende, en relación con la acción de nulidad del despido, que analizados los medios probatorios relativo a este punto, es posible entender acreditado que la trabajadora recibió el pago oportuno de sus cotizaciones, y que, por ende, no existió laguna previsional, ni de salud en mayo y junio de 2010.

SEGUNDO: Efectivamente, de los documentos que fueron aportados en el juicio, se colige que la actora gozó de licencia médica entre el 9 de abril y 4 de junio de 2020, ambas datas inclusive, según da cuenta el certificado de término de reposo laboral emanado de la Asociación Chilena de Seguridad.

TERCERO: También se constata, del certificado extendido por Víctor Céspedes Piña, ejecutivo agencia Santiago Gerencia Metropolitana Asociación Chilena de Seguridad, que durante ese lapso la actora estuvo en tratamiento médico, conforme lo dicta la Ley 16.744, pagándose en los períodos de 9 de abril a 10 de mayo, 11 a 24 de mayo, y 25 de mayo a 4 de junio, el subsidio respectivo, integrándose además, por concepto de cotizaciones previsionales, \$165.786.-, \$72.531.-, \$; y, \$56.989.-; por cotizaciones de salud \$103.643.-, 45.518.-, y 35.764.-; y, por aporte f. desempleo \$8.695.-, \$3.804.-, y \$2.989.-.

CUARTO: En cuanto al respectivo certificado de Previred, en él aparece que tanto el empleador de la demandante, como la Asociación



Chilena de Seguridad, pagaron cotizaciones a la AFP Capital, y Banmédica, por los mismos meses de mayo y junio de 2010, por los siguientes montos: \$25.544.-, \$156.267.-, \$ 50.847.-, \$97.687.-, \$18.850.-, \$25.652.-, y \$45.603.-; sin perjuicio que en el mes de julio y agosto también hubo cotizaciones en el mismo sentido.

Y, en último lugar, del mismo certificado no se vislumbra a simple vista que exista laguna previsional en junio de 2010.

QUINTO: Así entonces, el examen de los instrumentos mencionados permite concluir que la trabajadora no tuvo lagunas previsionales ni de salud en 2010, que recibió pagos de cotizaciones de parte de la Asociación Chilena de Seguridad y de su empleador, sin que pueda estimarse que hubo algún monto menor al que hubiere podido corresponder en esa época, no sólo porque los hechos ocurrieron hace trece años atrás, sino además porque no existió pericia alguna que permitiera determinar - mediante cálculos aritméticos, considerando las remuneraciones de la época conforme sus liquidaciones de sueldo, y los antecedentes que hubiere debido aportar la Asociación Chilena de Seguridad para tal propósito -, el monto efectivo que en aquella época hubiera debido pagarse; a lo que debe añadirse que sirve al efecto la explicación dada por el testigo Guillermo López Pávez, quien da cuenta del desajuste producido por la forma en que se efectuaron los pagos.

SEXTO: Por las razones expuestas, se rechazará la acción de nulidad del despido.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto lo establecido por los artículos 161, 162, 168, 485 y 489 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.-SE ACOGE la demanda subsidiaria por despido injustificado, interpuesta por doña María Bustamante Tapia, en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, por lo que se le condena al pago de las siguientes prestaciones:



1.-Recargo por la improcedencia de la causal invocada contenido en la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo, esto es el 30% sobre la indemnización por años de servicio, que corresponde en este caso, a la suma de \$8.633.889.-.

2.- Devolución de lo descontado a título de descuento por aporte del seguro de cesantía por la suma de \$9.260.934.-

Lo anterior con los reajustes, intereses y recargos legales dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

II.- SE RECHAZA la demanda principal por vulneración de derechos fundamentales y las demás prestaciones no acogidas en el punto anterior.

III.- SE RECHAZA la demanda de nulidad del despido.

IV.- SE RECHAZA la excepción de compensación opuesta por la demandada.

V.- No se condena en costas a la demandada, por no resultar totalmente vencida.

Regístrese, notifíquese, incorpórese a la carpeta virtual.

Redacción de la Ministro sra. Mónica Olivares Ojeda.

RoI N° 53-2023 Laboral Cobranza.



Mónica Adriana Olivares Ojeda
Ministro
Corte de Apelaciones
Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés
10:19 UTC-4



Pedro Nemesio Guiza Gutiérrez
Ministro
Corte de Apelaciones
Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés
10:26 UTC-4



Andrés Alejandro Provoste Valenzuela
Ministro
Corte de Apelaciones
Dieciséis de agosto de dos mil veintitrés
11:32 UTC-4



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sra. Mónica Olivares Ojeda, sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sr. Andrés Provoste Valenzuela. Iquique, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

En Iquique, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XVXLXHESYPB